



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

JUZGADO SEGUNDO (02) ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI
SR. JUEZ DR. CESAR AUGUSTO SAAVEDRA MADRID
E. S. D.

REFERENCIA: REPARACIÓN DIRECTA
RADICACIÓN: 76001-33-33-002-2022-00199-00
DEMANDANTE: VALERIA ZUÑIGA VALENCIA
DEMANDADO: DISTRITO ESPECIAL SANTIAGO DE CALI

ASUNTO: CONTESTACIÓN DEMANDA

DIEGO FERNANDO PAZ LENIS, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16.931.736 de Cali, abogado titulado con tarjeta profesional No. 154257 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado del Distrito Especial de Santiago de Cali, conforme al poder que adjunto al proceso, de manera atenta descorro el traslado para contestar en oportunidad la demanda promovida dentro del medio de control de la referencia que se interpuso contra el Distrito Especial de Santiago de Cali.

A LOS HECHOS U OMISIONES DEL MEDIO DE CONTROL

AL HECHO PRIMERO: No me consta, que ese día, en ese horario se movilizase en la motocicleta de Placas: ELK 90E Por el sector de la Calle 25 con Carrera 80 de la ciudad. No existe informe por parte de autoridad competente que avalen la ocurrencia de tales situaciones, por lo tanto, sus aseveraciones deberán acreditarse plenamente conforme lo señala el artículo 167 del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del C.P.A.C.A. y corroborarse por el Despacho en el momento procesal oportuno.

AL HECHO SEGUNDO: No es un hecho, se trata de juicios de valor que hace el Apoderado, respecto al presunto accidente y la imputación de responsabilidad que hace al Distrito Especial de Santiago de Cali que se pruebe. Porque como ya se manifestó en el hecho anterior: No me consta, que ese día, en ese horario se movilizase en la motocicleta de Placas: ELK 90E Por el sector de la Calle 25 con Carrera 80 de la ciudad la señora Zúñiga Valencia; No existe informe por parte de autoridad competente que avalen la ocurrencia de tales situaciones.

AL HECHO TERCERO: No me consta que las circunstancias de tiempo, modo y lugar se ajusten a lo señalado dentro del presente hecho. No existe informe por parte de la autoridad competente que de validez a lo expresado.

AL HECHO CUARTO: No me consta que las lesiones señaladas hayan sido producto de las circunstancias relatadas en los hechos de la demanda. Son aseveraciones que deberán acreditarse plenamente por la parte demandante, conforme lo señala el artículo 167 del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del C.P.A.C.A. y corroborarse por el Despacho en el momento procesal oportuno.

AL HECHO SEÑALADO COMO SEXTO: No me consta, se desconocen esas “*graves secuelas*”, de acuerdo con la historia clínica aportada, no se señalan secuelas de ningún tipo, menos si estas son de carácter permanente o transitorio. Así mismo se desconoce, que actividad laboral desempañaba y mucho menos lo relacionado con un despido.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

AL HECHO SEÑALDO COMO SEPTIMO: No se trata de un hecho propiamente, es una valoración subjetiva que realiza la parte demandante. La cual se apoya en lo previamente por ella señalado. Respecto de lo cual precise que de acuerdo con la historia clínica aportada no obran secuelas como tales y que no existe informe por parte de autoridad competente que indique la ocurrencia de tales situaciones.

AL HECHO SEÑALADO COMO OCTAVO: No me consta, son aseveraciones que deberán acreditarse de manera plena por la parte demandante, conforme lo señala el artículo 167 del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del C.P.A.C.A. y corroborarse por el Despacho en el momento procesal oportuno.

AL HECHO SEÑALADO COMO NOVENO: No es un hecho como tal, hace parte más de una enunciación propia de los fundamentos de derecho que se tienen.

AL HECHO SEÑALADO COMO DECIMO: No se trata de un hecho propiamente, es una valoración subjetiva que realiza la parte demandante. La cual se apoya en lo previamente por ella señalado. Respecto de lo cual precise que de acuerdo con la historia clínica aportada no obran secuelas como tales y que no existe informe por parte de autoridad competente que indique la ocurrencia de tales situaciones.

AL HECHO SEÑALADO COMO DECIMO PRIMERO: Como obra en la constancia de tramite conciliatorio extrajudicial administrativa extendida por la Procuraduría 19 Judicial.

A LAS DECLARACIONES Y CONDENAS DEL MEDIO DE CONTROL

El Distrito Especial de Santiago de Cali no es responsable de resarcir los perjuicios solicitados por la señora Zúñiga Valencia.

Que el material probatorio no es suficiente ni determinante en las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como ocurrió lo aseverado como fundamento para lo solicitado.

Por tal razón, me opongo a todas y cada una de las pretensiones de la parte actora, porque como quedará demostrado en el discurrir del proceso, no está acreditada la falla del servicio ni existe relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre el hecho y el daño que es imputado al Distrito Especial de Santiago de Cali.

- A los Perjuicios Inmateriales

Morales:

Objeto y me opongo a que se emita condena por concepto de perjuicios morales por el monto de Cinco (5) S.M.L.M.V que solicita la parte actora en su demanda esta objeción se presenta considerando la inexistencia de pruebas de una responsabilidad atribuible al DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, del perjuicio reclamado y por ende una falta de acreditación de estos.

El Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172, M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz, estableció entre otras cosas que:

(...) “El precio del dolor está llamado a establecerse por - Arbitrium Judicis fundado en las pruebas que reposen en el plenario, en ese orden de ideas, si la prueba plena del perjuicio no obra, difícilmente la sana crítica y las reglas de la experiencia de las que se vale legítimamente



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

el operador judicial podrán permitirle establecer vía compensación una afectación a un bien personalísimo, mucho menos tendrá algo por tasar o establecer” (...)

En el presente caso no se acreditan secuelas físicas o psíquicas de carácter permanente o transitorias que constituyan una alteración del estado de salud del demandante, puesto que si se revisa la historia clínica allegada no las establece, de tal manera que, si estas no se acreditan, no deberán reconocerse.

- A los Perjuicios Materiales

Daño emergente:

Objeto y me opongo a que se emita condena por concepto de daño emergente por un monto de: Doscientos treinta y dos mil pesos (\$ 232,000 M.Cte) de acuerdo con una cotización presentada por concepto de lo que podría costar la reparación del vehículo motocicleta de placas ELK 90E. Esta objeción se presenta considerando que no se probó un daño emergente de conformidad con lo establecido en el artículo 774 del Código de Comercio y al artículo 617 del Estatuto tributario.

Debe indicarse que la parte actora no acreditó de manera contundente los supuestos perjuicios que se le ocasionaron, en razón a que los medios probatorios allegados por la misma no resultan conducentes, dejando así en claro, que haya certeza de que estos fueron por ella asumidos. Incumpliendo de esta manera con la carga procesal que el ordenamiento jurídico le impone (art. 167 C.G.P.), razón por la cual, resulta improcedente su reconocimiento.

Se itera que no se allegó al expediente una factura o documento equivalente que permitiera inferir que dichos recursos efectivamente salieron del patrimonio del demandante, luego de conformidad con el ordenamiento jurídico de ninguna manera podrá acceder a dichos perjuicios, pues el mismo no se encuentra sustentado.

Lucro cesante:

Objeto y me opongo a que se emita condena por estos conceptos.

Debe decirse que de primer momento el reconocimiento y pago de incapacidades temporales por accidentes de tránsito continúan a cargo de EPS y ARL, según corresponda.

Así lo ha reconocido el Ministerio de salud y Protección Social, al determinar que el reconocimiento y pago de la prestación económica por incapacidad temporal a causa de accidente de tránsito continúa a cargo de las entidades promotoras de salud (EPS) y las administradoras de riesgos profesionales (ARL), si el accidente es calificado como de origen común o profesional, respectivamente.

La Ley 100 de 1993 en su artículo 206 establece que el Régimen Contributivo del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) reconocerá las Incapacidades generadas en Enfermedad General, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Para el cubrimiento de estos riesgos las Entidades Promotoras de Salud (EPS) podrán subcontratar con compañías aseguradoras. De igual modo en el Sistema General de Riesgos Profesionales conforme lo establece Artículo 1° "Todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la presente ley o del Decreto- ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ellos se incapacite, se invalide o muera, tendrá derecho a que este Sistema General le preste los servicios asistenciales y le reconozca las prestaciones económicas a los que se



refieren el Decreto ley 1295 de 1994 y la presente ley.

“(…) Parágrafo 2°. Las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, serán reconocidas y pagadas por la administradora en la cual se encuentre afiliado el trabajador en el momento de ocurrir el accidente o, en el caso de la enfermedad profesional, al momento de requerir la prestación.”

Conforme con las normas precitadas, el reconocimiento y pago de la prestación económica por incapacidad temporal por enfermedad o accidente común o profesional a cargo de las EPS y ARP según corresponda deviene de un mandato legal. En este orden de ideas, se tiene que el Artículo 20 del Decreto 3990 de 2007, establece de forma precisa las prestaciones económicas que se reconocerá a las víctimas de accidente de tránsito con cargo a la póliza SOAT o ce la Subcuenta ECAT según corresponda y específicamente, así: "Artículo 2°. Beneficios. Las personas que sufran daños corporales causados en accidentes de tránsito ocurridos dentro del territorio nacional, tendrán derecho a los servicios y prestaciones establecidos en el artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y demás normas que lo adicionen o modifiquen, bien sea con cargo a la entidad aseguradora que hubiere expedido el SOAT, respecto de los daños causados por el vehículo automotor asegurado y descrito en la carátula de la póliza, o con cargo a la Subcuenta ECAT del Fosyga, para las víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados o no identificados (...)”

En lo que respecta a acreditar el lucro Cesante pretendido. No se allegó ningún material probatorio que acredite, entiéndase: Contrato(s), extractos bancarios, certificados de cobro de incapacidades, certificado de aportes al Sistema Integral de la Seguridad Social que den cuenta de lo propio en su actividad laboral.

En fundamento a lo anterior, el Consejo de Estado en Sala Plena de la Sección Tercera, Sentencia de Unificación con fecha del 18 de julio de 2019, Magistrado Ponente Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera (exp. 44572), precisó que:

(...) “En lo que atañe a la liquidación del lucro cesante futuro, es preciso eliminar la presunción según la cual toda persona en edad productiva percibe al menos un salario mínimo, en tanto contraría uno de los elementos fundamentales del daño, esto es, la certeza o certidumbre misma”
(...)

Lo anterior, en tanto que, para dicha Corporación, se puede incurrir, al no dudar de su existencia, en el desatino de indemnizar un perjuicio inexistente, incierto o eventual. En este tenor lo señaló el fallo del Consejo:

(...) “2. Presupuestos para acceder al reconocimiento del lucro cesante:

2.1.2 Todo daño y perjuicio que el demandante pida que se le indemnice por concepto de lucro cesante debe ser objeto de prueba suficiente que lo acredite o, de lo contrario, no puede haber reconocimiento alguno (artículos 177 del C. de P. C. y 167 del C.G.P.).

2.2.2 Ingreso base de liquidación

El ingreso de los independientes debe quedar también suficientemente acreditado y para ello es necesario que hayan aportado, por ejemplo, los libros contables que debe llevar y registrar el comerciante y que den cuenta de los ingresos percibidos por su actividad comercial o remitir, por parte de quienes estén obligados a expedirlas, las facturas de venta, las cuales tendrán valor probatorio siempre que satisfagan los requisitos previstos en el Estatuto Tributario, o que se haya allegado cualquier otra prueba idónea para acreditar tal ingreso”(…)

También es de manifestar que la ausencia de un porcentaje de pérdida de capacidad laboral no permite tenerse como acreditada una incapacidad y/o invalidez física o psíquica que



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

pueda limitar la vida laboral de la demandante en una determinada proporción.

En efecto, el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 18 de julio de 2019, Radicación número: 73001-23-31-000-2009-00133-01(44572), con ponencia del Consejero CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA, ha señalado que el lucro cesante se define como:

“la ganancia frustrada o el provecho económico que deja de reportarse y que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima”; por tanto, las ganancias o provechos económicos que puede percibir por este concepto la actora, en este caso, en modo alguno se ven frustradas, pues no se encuentra calificada con algún porcentaje de pérdida de la capacidad laboral por el respectivo organismo o personal especializados”.

Así, la misma Corporación, en sentencia del 28 de abril de 2021, Radicación número: 27001-23-31-000-2010-00225-01(45905), con ponencia del Consejero MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ, ha concluido que:

“el criterio jurisprudencial para la liquidación del lucro cesante es aquel según el cual se reconoce el porcentaje de pérdida de capacidad laboral sobre el salario devengado hasta la vida probable del lesionado”. Como quiera entonces que el lucro cesante, en caso de lesiones, está definido por la disminución de pérdida de capacidad laboral, y por consiguiente, ésta es determinante para establecer el monto del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, no puede establecerse entonces indemnización alguna por dicho concepto”.

Al no aportar al expediente ninguna prueba que permitiera inferir ingresos devengados de conformidad con el ordenamiento jurídico. No se debe acceder a dichos perjuicios, pues el mismo no se encuentra sustentado y al reconocerlos se estaría propiciando un enriquecimiento sin justa causa.

RAZONES DE DEFENSA Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 90 de la Constitución Política consagró el sistema de responsabilidad extracontractual del Estado, aduciendo que este respondería patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades. De conformidad con el artículo citado, el esquema de la responsabilidad extracontractual del Estado, se contrae a dos elementos a saber: i) la demostración de un daño antijurídico, entendido este como aquella afectación patrimonial o extrapatrimonial a un bien, derecho o interés legítimamente protegido por el ordenamiento jurídico, el cual la víctima no estaba en la obligación legal de soportar; y ii) la imputación de este al ente público, entendido como la atribuibilidad tanto material (conducta: acción y/u omisión) como jurídica (establecer el fundamento jurídico de la obligación resarcitoria) de ese menoscabo a la autoridad demandada.

- **El daño antijurídico.**

Constituye el primer presupuesto y fundamento de la responsabilidad extracontractual del Estado, el cual no tiene definición positiva en nuestro ordenamiento jurídico, en esa medida el desarrollo de su contenido normativo se ha perfeccionado vía jurisprudencial, por el Consejo de Estado, quien lo ha descrito en los siguientes términos:

“(…) es la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”; o también se ha entendido



como el daño que se produce a una persona a pesar de que “el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de justificación (...)”.

En ese sentido, para que el daño se torne en antijurídico, debe reunir los siguientes elementos: i) Que el afectado no esté en la obligación jurídica de soportarlo, esto es, que sea antijurídico en sentido estricto; ii) Que sea cierto, es decir, que sea apreciable material o jurídicamente y, que constituya una afectación real a un bien, derecho o interés legítimamente protegido por el ordenamiento jurídico, toda vez que la ley –en sentido amplio no protege situaciones por fuera del marco legal y, iii) que sea personal, refiriéndose a que sea padecido por quien lo está reclamando, constituyendo una especie de legitimación en la causa –por activa para reclamar el resarcimiento de este, bien sea porque el ordenamiento jurídico lo autoriza, el bien o interés le es propio o le devino por herencia. Tales elementos concretan el concepto de daño antijurídico, dentro del cual resulta pertinente clarificar, que su antijuridicidad no deviene de la imputabilidad del mismo al Estado, sino que tal categoría sobreviene de si la persona que lo padece está o no en el deber jurídico de soportarlo -ello porque el ordenamiento jurídico le imponga o no tal carga-, pues es precisamente esa ausencia de justificación en el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas, que por el hecho de vivir en sociedad todos debemos soportar, lo que precisamente lo hace antijurídico.

Sobre el primer elemento de responsabilidad estatal, podemos evidenciar que de acuerdo con el material probatorio allegado en la demanda.

Las anotaciones realizadas por el personal médico, en la historia clínica describen unas lesiones en la persona de Valeria Zúñiga Valencia, pero no permiten afirmar con certeza y de manera detallada la participación del Distrito Especial de Santiago de Cali en su origen. Esto es que no hay como verificar circunstancias de tiempo, modo y lugar del presunto accidente.

- **La atribución de la responsabilidad**

Este elemento de la responsabilidad patrimonial tiene que ver con la atribución fáctica y jurídica de la afectación sufrida por la parte accionante, a la Administración Pública, es decir, que esta se debe analizar a partir del estudio de dos (2) supuestos: Una imputación material, que tiene como fundamento la causación física de la conducta, asimilable a una relación de causalidad entre la conducta del Estado y el daño padecido por la víctima, y otra conocida como imputación jurídica, que se refiere a la búsqueda del contenido obligacional que permita reparar al demandante por la conducta oficial, y en la cual deben estudiarse los diferentes títulos de imputación de la responsabilidad extracontractual, para determinar cuál es el llamado a aplicar al caso concreto.

El modelo constitucional de responsabilidad estatal no privilegió ningún régimen de atribución en particular, dejando a arbitrio del operador judicial, frente a cada caso en concreto, la escogencia de los argumentos fácticos y jurídicos que sustenten la decisión, eso ha permitido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo acudir a diversos “títulos de imputación”, de acuerdo con las circunstancias fácticas del caso. De esta manera, la imputación fáctica y jurídica del daño antijurídico al Estado, puede hacerse a título de falla del servicio, desequilibrio de las cargas públicas, concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que lo permita en el caso concreto.

Para determinar cuál es el llamado a aplicar al caso concreto. El modelo constitucional de responsabilidad estatal, no privilegió ningún régimen de atribución en particular, dejando a



arbitrio del operador judicial, frente a cada caso en concreto, la escogencia de los argumentos fácticos y jurídicos que sustenten la decisión, eso ha permitido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo acudir a diversos "títulos de imputación", de acuerdo a las circunstancias fácticas del caso.⁶ De esta manera, la imputación fáctica y jurídica del daño antijurídico al Estado, puede hacerse a título de falla del servicio, desequilibrio de las cargas públicas, concreción de un riesgo excepcional, o cualquiera otro que lo permita en el caso concreto.

- **De la falla del servicio**

De conformidad con lo que se esgrime en la demanda, para que pueda predicarse responsabilidad en este caso, debe acreditarse que el Distrito Especial de Santiago de Cali omitió realizar el debido mantenimiento del tramo vial donde resultó accidentado la señora Zuñiga Valencia y adicionalmente, deberá demostrarse que el daño antijurídico cuya existencia no ha sido acreditada, tuvo su origen en la mencionada omisión de mantenimiento, todo con el fin de demostrar la existencia del nexo causal.

Estando ausentes los elementos señalados anteriormente, me permito solicitarle señor Juez que se reconozca: La INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR CARENCIA DE NEXO CAUSAL QUE COMPROMETA AL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI CON LOS PRESUNTOS PERJUICIOS RECIBIDOS POR LA PARTE ACTORA.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRUEBAS APORTADAS Y SOLICITADAS POR LA PARTE DEMANDANTE

Respecto a las Imágenes aportadas como prueba por la parte demandante me opongo, manifestando que se allego un material en imágenes en el que se registra un daño en la capa asfáltica de una vía y unas lesiones físicas.

Sobre este material es preciso decir que, no es posible establecer la relación entre el medio probatorio y el hecho que se pretende probar, no existe forma de establecer la época de las imágenes, o que correspondan al "estado de la vía pública" ni atarlas a las secuelas físicas reclamadas.

Se ha pronunciado el Consejo de Estado, indicando que:

"Sobre las imágenes en fotografías y video cabe decir, como lo ha explicado la Sala en otras oportunidades (1) , que son en este caso documentos privados representativos, por no acreditarse que las tomó un funcionario público, en ejercicio de su cargo o con su intervención (CPC, art. 251). La doctrina se ha pronunciado sobre el valor probatorio de este tipo de documento representativo; dice que las fotografías de personas, cosas, predios, etc, sirve para probar el estado de hecho que existía en el momento de ser tomadas, de acuerdo con la libre crítica que de ellas haga el juez; que son un valioso auxiliar de la prueba testimonial, cuando el testigo reconoce en la fotografía a la persona de la cual habla o el lugar o la cosa que dice haber conocido (2) . Si bien para cuando se aportaron esas fotografías regía el artículo 25 del Decreto-Ley 2.651 de 1991, lo cierto es que por si sola la presunción de autenticidad de las fotografías no permite definir la situación temporal de ocurrencia del suceso, que representan, pues la ley procesal civil enseña, en el artículo 280, que la fecha cierta de los documentos privados solo se deduce respecto de terceros "desde el fallecimiento de alguno de los que lo han firmado, o desde el día en que ha sido inscrito en un registro público o en que conste haberse aportado en un proceso, o en que haya tomado razón de él un funcionario competente en su carácter de tal, o desde que haya ocurrido otro hecho que le permita al juez adquirir certeza de su existencia" (negrilla por fuera del texto original). En consecuencia las fotografías privadas, allegadas



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

con la demanda, no se tendrán en cuenta, a pesar de que en la demanda se aduzca que corresponden al sitio en el que pareció ahogado el menor, debido a que la fecha cierta, por ser documento privado, se entiende solo a partir de una de las situaciones que fija la ley, ya transcritas, y, además, porque ninguna de las personas que declararon en el proceso contencioso administrativo las reconoció, por no habérseles puesto de presentes al momento de rendir su testimonio, y tampoco a través de inspección judicial

se estableció que ellas sí corresponden al río Pepé" (Subraya fuera del texto) (Sentencia de 28 de julio de 2005. Expediente 14.998. Consejera Ponente: Dra. María Elena Giraldo)

Igual postura asumió la Alta Corporación en Sentencia 1996-03099 de junio 8 de 2011 al señalar lo siguiente:

"Previo al análisis del fondo de la controversia, es menester advertir que la parte actora, con el fin de acreditar los hechos, aportó al proceso unas fotografías (fls. 91 a 96, cdno. 1), las cuales no serán valorados en esta instancia, toda vez que carecen de mérito probatorio, en la medida en que si bien fueron expuestas a algunos testigos (fis. 78 a 82, cdno. 3), estos resaltan en sus declaraciones que las imágenes corresponden a la calle en la cual se presentó el accidente, sin embargo, desconocen la época en que fueron tomadas o documentadas, de modo que no es posible definir con ellas la situación temporal de ocurrencia del suceso que representan"

OPOSICION A LA PRUEBA PERICIAL SOLICITADA POR LA PARTE DEMANDANTE

Me opongo a que se decrete la prueba pericial solicitada por la demandante, pues ella debió cumplir con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con lo dispuesto en el Art. 166 del CPACA.

La demandante tenía la obligación de anexar a su libelo, los dictámenes periciales necesarios, para probar su derecho y no lo hicieron y por ende la prueba pericial solicitada debe ser negada por el H. Juez, pues el Despacho no puede subsanar esta falencia.

CONCLUSIONES:

Analizando el presente caso, surgen muchas inquietudes. Como si los perjuicios sufridos por la Señora Zuñiga Valencia ¿Serán producto de una falla del servicio? O, por el contrario, ¿fue producto de alguna circunstancia que no es atribuible a la Administración?

Me genera esta duda, Señor Juez, por la falta de material probatorio conducente y pertinente aportado al Proceso, que permita verificar plenamente y sin lugar a duda las circunstancias de tiempo, modo y lugar que afirmen lo que en realidad sucedió.

Según los Artículos 164, 165, 166 y 167 de la Sección Tercera, Régimen Probatorio, Título Único, "PRUEBAS", Capítulo 1 del C.G.P establecen que:

Art. 164 – Necesidad de la prueba. Toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso...

Art. 165 – Medios de prueba. Sirven como pruebas la declaración de parte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

El Juez practicará las pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su prudente juicio...

Art. 167 – Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba.

La carga de la prueba recae sobre la parte demandante, quien deberá probar la existencia del nexo causal entre el “daño” ocasionado y la supuesta falla en el servicio.

Por lo anteriormente expuesto, considero que el ente territorial: Distrito Especial de Santiago de Cali, no es responsable, pues la participación de este en la ocurrencia de los hechos materia de demanda no está acreditada y por lo tanto no se le puede endilgar ningún tipo de responsabilidad, ya que es evidente la AUSENCIA DE PRUEBAS, toda vez que no existe material probatorio idóneo y conducente que permita establecer la presunta falla del servicio que invoca la parte demandante.

Como consecuencia de esto le solicito comedidamente se exonere de toda responsabilidad al ente territorial Distrito Especial de Santiago de Cali, Señor Juez.

PRUEBAS, PERSONERÍA, LLAMAMIENTO Y ANEXOS

PRUEBAS

Solicito se tengan como pruebas las presentadas por la parte actora, con la posibilidad de ser controvertidas en el transcurso del proceso.

En aras a un efectivo derecho a la defensa, solicito comedidamente se me autorice contrainterrogar a los testigos de la parte demandante, si los hubiere en la audiencia de recepción de los testimonios que llegaren a ser decretados por su Despacho, tal como está previsto en el Código General del Proceso en sus Artículos 226 y 228 que versan sobre la prueba pericial y su respectiva contradicción. Atendiendo lo anterior, le solicito comedidamente se sirva citar a los autores de estas pruebas presentadas por la parte demandante a efectos de hacer la contradicción respectiva.

PERSONERÍA

Solicito al Honorable Juez Segundo (02) Administrativo Oral del Circuito Judicial de Santiago de Cali, reconocermé personería para actuar dentro del proceso, conforme al poder que se me ha conferido y que adjunto a este escrito, con sus respectivos anexos.

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

En escrito separado con el fin de que se hagan parte en el presente proceso, me permito formular Llamamiento en Garantía a las Compañías Aseguradoras: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A, CHUBB SEGUROS COLOMBIA, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, AIG COLOMBIA SEGUROS GENERALES AHORA SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Quienes figuran en la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No 1507222001226, expedida por la Compañía de Seguros: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

S.A. También se aportan Certificados de existencia y Representación Legal expedidos por la Cámara de Comercio de Bogotá.

ANEXOS

Los siguientes documentos:

- 1) Poder especial a mi conferido por la jefe Jurídica del distrito Especial de Santiago de Cali con sus respectivos anexos.
- 2) Escrito de Llamamiento en Garantía.
- 3) Copia Póliza No 1507222001226, expedida por la Compañía de Seguros, MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. Expedida el trece (13) de mayo de 2022 con vigencia desde el: 30 de abril de 2022 hasta el 01 de diciembre de 2022.

Certificados de Existencia y Representación legal expedidos por Cámara de Comercio de Bogotá de las compañías de Seguros: MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A, CHUBB SEGUROS COLOMBIA, ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, AIG COLOMBIA SEGUROS GENERALES AHORA SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. (Como obra en la Escritura 2692 de la Notaría Once de Bogotá D.C. Del 4 de agosto de 2017 y Escritura Publica Aclaratoria No. 2840 del 17 de agosto de 2017 de la Notaría Once de Bogotá D.C., inscrita el 23 de agosto 2017 bajo el número 02253277 del libro IX, la sociedad cambio su nombre de: AIG SEGUROS COLOMBIA S.A pero podrá utilizar la sigla AIG SEGUROS o AIG COLOMBIA o AIG, por el de: SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. - Tomado del Cert. de existencia y R.legal de SBS Seguros Colombia S.A – Pag 154 de 197 del Llamamiento en Garantía)

donde figuran los respectivos datos para efectos de notificaciones.

NOTIFICACIONES – CANALES DIGITALES DE COMUNICACION

EI DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI – SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, recibirá notificaciones en el correo electrónico: notificacionesjudiciales@cali.gov.co

El suscrito como apoderado del DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, en el Correo electrónico: diegofernandopaz@hotmail.com

Las compañías objeto del llamado y sus Representantes Legales, las recibirán en las direcciones indicadas en los Certificados de Existencia y Representación legal expedidos por Cámara de Comercio.

Atentamente,

DIEGO FERNANDO PAZ LENIS
C.C 16.931.736 de Cali -Valle - T.P 154257 del C.S.J
Apoderado Distrito Especial de Santiago de Cali
Canales de Comunicación: diegofernandopaz@hotmail.com
311 385 1932